

Pinchazo en hueso

Luis Hernández Navarro

La jornada

29 de abril de 2003

Como esos toreros que culminan una gran faena pinchando en hueso a la hora de matar, así remató el movimiento campesino la más importante movilización contra la apertura comercial en el agro realizada en años. Los líderes rurales perdieron en la mesa de negociación con el gobierno lo que habían ganado en las calles, carreteras y plazas públicas.

Las organizaciones campesinas nacionales lograron en unos cuantos meses poner los problemas del agro en el centro del debate político nacional, forjar una amplia unidad de acción nunca antes vista, ganar a la opinión pública a su causa, converger con una parte significativa del movimiento sindical y obtener el apoyo del episcopado. Sin embargo, perdieron, en pocos días, la resolución de sus demandas centrales: revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del artículo 27 constitucional y reorientación de la política hacia el campo.

Curiosa paradoja: en plena época de cambio, con un gobierno sin bases rurales y de cara a unas elecciones críticas, con una fuerza y un respaldo como el que no han tenido en décadas, las asociaciones de productores negociaron como si tuvieran delante a un gobierno del PRI, como si la rebelión zapatista no hubiera abierto un horizonte de lucha mucho más amplio y como si los ejidatarios de Atenco no hubieran dado una lección.

Obtuvieron a cambio, según ellas mismas reconocieron durante la ceremonia oficial de firma del acuerdo, pequeñas concesiones. Pequeñas en comparación no con un programa máximo de derrota del neoliberalismo, sino con algo mucho más modesto: las aspiraciones que los dirigentes dijeron tener públicamente en declaraciones a la prensa y documentos; pequeñas, en relación con las necesidades del campo, los campesinos y la agricultura nacional; pequeñas en función de las propuestas para las que pidieron la solidaridad de muchos; pequeñas si se les mide con la vara de los recursos y concesiones que este gobierno ha otorgado a los grandes empresarios.

Es cierto que en ocasiones esas pequeñas conquistas pueden significar mucho para las organizaciones campesinas. Para fuerzas agobiadas por la escasez de recursos, un modesto programa de apoyo a la organización para la comercialización puede representar la diferencia entre la sobrevivencia y la desaparición.

Además, a diferencia de los sindicatos obreros que perciben cuotas de sus afiliados, o de los partidos políticos que tienen acceso a subvenciones públicas, las centrales rurales deben financiar su funcionamiento con dinero que obtienen del gobierno (y esporádicamente de fundaciones), usualmente destinado a actividades relacionadas con la capacitación o el extensionismo. Se encuentran así en una situación muy precaria. Y, para muchas de ellas, cualquier posibilidad de remontar esta debilidad pecuniaria es bienvenida, aunque no represente un avance en la satisfacción de las necesidades de sus afiliados. Esta circunstancia se hace mucho más dramática porque muchas de las acciones de protesta que han realizado en el pasado han tenido como consecuencia que se giren órdenes de aprehensión en contra de dirigentes. La amenaza de ejecutar las denuncias penales funciona como verdaderas espadas de Damocles sobre sus cabezas y los coloca en gran desventaja frente a las autoridades.

Sin duda la suma de coacción gubernamental, debilidad organizativa, avances limitados y ambición de varios líderes, presionaron para que el movimiento nacional (con la excepción de UNORCA, Frente Democrático Campesino, Unofoc y Frente en Defensa del Campo) pinchara en hueso a la hora de coronar su faena. Pero estos factores no evitan que firmar el acuerdo tenga un costo.

El precio que las organizaciones campesinas independientes deberán pagar por esos pequeños avances es elevado: avalarán, sin disensos, en un Acuerdo Nacional (con mayúsculas), al conjunto de la política agropecuaria de la actual administración. Tomarán como propias las líneas de acción anticampesinas del gobierno. En suma, darán legitimidad a lo que, desde la lógica de los pequeños productores rurales, no debería tenerla. Ya lo dijo el Ejecutivo: "Nadie tendrá justificación para quebrantar la ley con el fin de hacerse escuchar, ni tendrá pretexto para actuar fuera del marco de las instituciones".

Muchos de los puntos que legitiman al gobierno y hacen perder autonomía a las organizaciones podrían haber quedado afuera del documento. Se podía haber pactado sólo en lo que había acuerdo, o añadido un texto con las salvedades campesinas. Inexplicablemente, esto no se hizo.

En cambio, el éxito gubernamental no es pequeño. Fue una bocanda de aire fresco. Fiel a su estrategia de convertir sus derrotas en triunfos, la administración de Vicente Fox remontó una situación adversa y la transformó en victoria. Se allegó así una de cal por las que lleva de arena. Sus descalabros con el asunto de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, el Plan Puebla-Panamá, el acuerdo migratorio, la construcción del aeropuerto en Atenco y el fracaso en las reformas del Estado fiscal y eléctrica encontraron un paliativo en el Acuerdo para el Campo.

El gobierno panista tiene así, de cara a las próximas elecciones, una valiosa carta que jugar, irónicamente a costa de dirigentes campesinos vinculados mayoritariamente al PRI y al PRD. A muy bajo precio, sin hacer concesiones fundamentales a su política, a la cuenta de los pobres del agro, podrá tener una penetración en la sociedad rural con la que nunca soñó. ¡Chapó!

PD: La vieja y la nueva política. No deja de ser significativo que Alberto Gómez y Víctor Quintana, dirigentes de dos de las cuatro organizaciones que no se sumaron al acuerdo, no hayan aceptado las candidaturas que el partido del sol azteca les ofreció, mientras que quienes con mayor beligerancia promovieron la firma del pacto sean candidatos a diputados o suspirantes fracasados a una nominación

Twitter: [@lhan55](#)

Fuente: <https://www.jornada.com.mx/2003/04/29/021a1pol.php?origen=opinion.php&fly=>